

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALAS

6 a 11 de septiembre de 2011, UFPE, Recife-PE

Grupo de Trabajo: GT 02 “Ciudades latinoamericanas en el nuevo milenio”

Título del trabajo: “*Más allá del Indoamericano. Análisis crítico de la intervención estatal en tomas de tierras urbanas.*”

Autora: Mgs. Mariana Giaretto. Docente e investigadora de Fadecs y Cehepyc, Universidad Nacional del Comahue.

Resumen

La toma del Parque Indoamericano¹ significó un punto de inflexión en la dinámica urbana actual, expresando la complejidad de las tomas en tanto conflictos socio-políticos. Este trabajo propone ciertas coordenadas conceptuales para el análisis crítico de dicha complejidad, focalizando en los nexos entre lo estructural y lo coyuntural, dando cuenta de una multiplicidad de determinaciones que entran en juego en este tipo de conflictos, tales como: las tendencias a la *acumulación por desposesión* y a la monopolización privada del espacio urbano (Harvey, 1977) propias del capitalismo de los últimos 30 años, la ambigüedad de los mecanismos estatales de dispersión de la lucha por la tierra urbana -combinando mecanismos represivos con formas de integración y/o neutralización (De Sousa Santos, 1982)-, y las prácticas de disrupción y negociación políticas de los sectores subalternos.

¹ Ubicado en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas tierras fueron tomadas en los primeros días de diciembre del 2010.

Introducción

El conflicto socio-político expresado en la toma del Parque Indoamericano - ubicado en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los primeros días de diciembre de 2010 -, marcó un punto de inflexión en la dinámica política actual porque manifestó la complejidad de relaciones entre ciertas tendencias estructurales del sistema, los mecanismos de intervención y dispersión estatal del conflicto urbano, y algunas estrategias de inscripción política de los sectores subalternos.

Este trabajo propone ciertas coordenadas conceptuales para el análisis crítico de dicha complejidad, justamente focalizando en los nexos entre lo estructural y lo coyuntural, y dando cuenta de una multiplicidad de determinaciones que entran en juego en este tipo de conflictos, tales como: las tendencias a la *acumulación por desposesión* y a la monopolización privada del espacio urbano (Harvey, 1977) propias del capitalismo de los últimos 30 años; la ambigüedad de los mecanismos estatales de dispersión de la lucha por la tierra urbana - combinando mecanismos represivos con formas de integración y/o neutralización-; y ciertas prácticas de interrupción y negociación políticas de los sectores subalternos. Determinaciones que configuran un entramado socio-político complejo que no se cristaliza ni disuelve en un solo conflicto.

I- Parque tomado

La toma de tierra -en tanto práctica política que permite a los sectores populares acceder a la ciudad- no es un fenómeno nuevo. En la génesis de las ciudades argentinas -en tanto núcleos de 'desarrollo' capitalista- podemos encontrar procesos de expropiación, expulsión y exterminio de antiguos pobladores, y al mismo tiempo de acumulación y concentración de la tierra en pocas manos privilegiadas. Consolidado el Estado capitalista como forma de organización social de nuestro país, los sectores desposeídos han accedido a la urbanidad a través de dos grandes vías: la autourbanización precaria expresada en villas y asentamientos humanos, y la planificación estatal basada en modelos de ordenamiento territorial que intentan contrarrestar las

tendencias destructivas de la economía de mercado basadas en la acumulación por desposesión.

Si pudiésemos recorrer algo así como la historia de la urbanidad argentina, encontraríamos períodos en los que los sectores populares luchan por el espacio urbano frente al urbanismo de clase, otros períodos en los que la intervención estatal intenta aliviar la tensión urbana planificando, redistribuyendo y modelando el ordenamiento territorial a través de planes de vivienda social, y otros en los que se da una combinación de ambas vías.

Entonces, y en el marco de esta historicidad urbana cabe preguntarnos ¿por qué la toma del Parque Indoamericano tuvo un impacto político y social que podría considerarse un punto de inflexión en dicha historicidad? Pregunta que ha tenido diversas respuestas, que en ciertos casos simplifican o reducen el problema a alguna de sus aristas posibles. Entre ellas podemos encontrar que la toma puede entenderse: ‘por la crisis habitacional general’, ‘por promesas políticas incumplidas’, ‘por el manejo de punteros y especuladores’, ‘por motivaciones conspirativas y destituyentes’, ‘porque el lugar estaba abandonado y la gente a su alrededor hacinada’... y así podríamos seguir recuperando razones que -algunas más y otras menos- constituyen una constelación de múltiples determinaciones que requiere de un análisis que rebase dichas aristas en su unilateralidad y las aborde en su complejidad.

Dicha complejidad deviene de la especificidad del caso - de éste y de cualquier otro-, lo que no implica desconocer las tendencias, mecanismos y prácticas comunes a la mayoría de las experiencias de tomas de tierras urbanas. Se trata entonces de analizar cómo se expresan estas coordenadas comunes configurando la especificidad de esta experiencia.

A simple vista, son tres los rasgos que pueden ayudarnos a comprender la especificidad de la toma del Indoamericano en relación a las múltiples y diversas tomas de tierras urbanas que cotidianamente se despliegan en nuestro país: la *localización y extensión de las tierras tomadas*, la *masividad de la toma y su efecto expansivo* al interior y al exterior de la toma, y la *coyuntura política de conflicto pre-electoral* entre gobierno local y nacional.

El análisis de cada uno de estos rasgos y sus interrelaciones no puede anclarse en los aspectos meramente descriptivos de dónde, cuántos, quiénes, cómo y para qué tomaron las tierras del parque, por eso la propuesta es revisar esas facticidades a la luz de categorías analíticas que permitan ir más allá del Indoamericano.

Tierras capitales

Las tomas de tierras urbanas en general son acciones disruptivas del ordenamiento territorial de las ciudades capitalistas, porque cuestionan la distribución y la organización del espacio urbano y ejercen una presión social que cuestiona la injusticia territorial de dicho ordenamiento.

En este sentido, acordamos con la idea que “(...) los grupos más pobres tienen un poder singular -poder que seguramente la mayoría de ellos lamentan tener- en el sentido de que a los grupos más ricos de la sociedad contemporánea no les gusta tener que vivir en estrecha vecindad con aquellos. Por tanto el pobre ejerce una presión social que puede variar de forma de ir de su mera presencia, a través de una exhibición de todas las patologías sociales que se encuentran relacionadas a la pobreza, hasta los disturbios.” (Harvey, 1977:180).

Esta presión disruptiva se vuelve aún más aguda si las tierras tomadas pertenecen al espacio público -y aún más si están destinadas a espacios verdes, lo que le agrega un plus de lucha por el espacio común-, si abarcan grandes extensiones, y si su ocupación o abandono implican la desvalorización de las propiedades aledañas.

Las tierras del Indoamericano combinan estos tres rasgos, en la medida que el parque con sus 130 hectáreas es el segundo más grande de la Ciudad de Buenos Aires, está ubicado en la zona Sur entre las avenidas Escalada, Castañares, la autopista Cámpora y las vías del ferrocarril Metropolitano, integrando los barrios de Villa Soldati y Villa Lugano². El paisaje muestra una

² Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/dis_participativo/indoamericano.

Consultada el 2 de febrero del 2011.

gran extensión de tierras abandonadas, sin inversión ni mantenimiento, rodeadas de barrios pobres en los que se sufre el hacinamiento y la presión de los costos de acceder a un lugar en la gran ciudad, así como de barrios de clase media baja que reaccionaron en contra de la toma.

Efecto alud

En su gran mayoría las tomas de tierras urbanas se caracterizan por ser impulsadas y protagonizadas por un grupo más o menos reducido de familias que a medida que avanzan en el proceso de consolidación de la toma suman integrantes y buscan apoyo de organizaciones sociales³. En el primer *momento de organización inicial*, la multiplicación de integrantes suele variar de 15 a 50, de 100 a 500 familias, pero los filtros y presiones propias de la experiencia de la toma suelen estabilizar una cantidad proporcional de personas de acuerdo a la disponibilidad de parcelas o a las posibilidades de conseguirlas.

La expansión interna de la toma del Indoamericano fue abrupta: las 300 familias -1200 personas aproximadas- que iniciaron el proceso devinieron en 13.333 personas según fuentes oficiales⁴. Los *momentos de posicionamiento*

³ Un análisis de los momentos que atraviesan gran parte de las tomas de tierras urbanas desde su origen a la transformación en barrio puede encontrarse en Giaretto, M. 2010 “Estado y tomas de tierras urbanas: aproximaciones a la problemática de la urbanización de los sectores populares. Análisis de experiencias concretas del conflicto en la ciudad de Cipolletti, (Río Negro, Argentina).” Tesis de maestría CLACSO/FLACSO.

⁴ Mientras la gendarmería cercaba el predio para evitar la entrada de más gente, el Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo que arrojó los siguientes datos: “(...) las personas presentes en el lugar durante el operativo informaron además de su núcleo familiar, lo que significa 7.467 más entre niños y niñas, ancianos y personas enfermas. Es decir que el total de las personas afectadas al predio es de 13.333 personas, de las cuales pudieron cruzarse los datos de 6.075. El resto, 7.258, no pudo ser analizado por la falta de DNI de la persona censada o la falta de memoria del número. De acuerdo con este cruzamiento, el 95% de los 6.075 son habitantes de villas y asentamientos cercanos al Parque Indoamericano, como el Bajo Flores, la 11-14, Ciudad Oculta, Los Piletos, Villa 20. En tanto, el 5% restante proviene del conurbano.” Fuente Telam, <http://www.telam.com.ar/vernota>. consultado el 2 de febrero de 2011.

espacial y político y el *momento de resistencia*, estuvieron atravesados por la heterogeneidad social y política de quienes las protagonizaron y se sumaron a la toma. Sin embargo, el *momento de transfiguración de la toma en barrio* encontró su límite negativo en la negociación con el Estado, que luego de varios días logró desactivar la toma, fragmentar los grupos bajo promesa de planes de viviendas a gestionarse de manera conjunta entre gobierno de la ciudad y gobierno nacional. A diferencia de otras tomas y a pesar del importante poder de presión y nivel de conflictividad que adquirió, esta toma no logró su relocalización, punto clave para el proceso de transfiguración en barrio, lo que resulta paradójico y una línea de análisis a profundizar.

A su vez, la toma del parque tuvo en efecto de expansión externa ya que en los días sucesivos se generaron tomas en Flores, Villa Lugano, Barracas, Bernal y González Catán⁵. Cada una de ellas con diversas características y niveles de conflictividad, pero todas ellas surgieron como eco de la toma del Indoamericano.

De este modo, la magnitud del conflicto complejizó su desactivación, el Estado viró de la represión hacia la neutralización e integración del conflicto. Viraje que no puede comprenderse sino se enmarca en la coyuntura pre-electoral entre el gobierno local y el nacional.

Pujas políticas: de la represión a la neutralización e integración del conflicto

Las tomas de tierras urbanas encarnan un conflicto político-social que interpela al Estado en sentido ampliado: no sólo en sus diferentes niveles de gobierno - municipal, provincial y nacional- y a sus diferentes poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, sino también a los partidos políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación que de acuerdo al caso y su nivel de conflictividad participan e inciden en las formas en las que se resuelve la toma.

⁵ Fuente: Página/12, 15 de diciembre 2010.

En la mayoría de los casos, es el gobierno local el que debe asumir el problema y encabezar posibles formas de resolución que dependerán en gran medida de los niveles de concordancia pero también de autonomía relativa en relación al gobierno provincial y al gobierno nacional. Cuando existen pujas políticas entre los diferentes niveles de gobierno, las tomas de tierras resultan un problema susceptible de capitalización política, por lo que se complejizan las relaciones de fuerza entre clases e intra-clases y se tornan poco predecibles las vías de resolución/disolución que pueda adoptar el conflicto.

Tanto los mecanismos de dispersión de los conflictos basados en la represión, como los que persiguen su neutralización y/o integración, requieren un mínimo acuerdo y sincronización estratégica del Estado en su conjunto. En el caso de las tomas de tierras, la represión suele implementarse en los primeros momentos en los que la resistencia popular aún no está del todo organizada y cuyo efecto ejemplificador evita la multiplicación de los protagonistas, además suele ser legitimada por una orden judicial de desalojo y una operación mediática que puede variar desde la invisibilización a la criminalización de la toma. La negociación para neutralizar el conflicto o capitalizarlo por la vía de la integración se pone en juego cuando no pueden afrontarse los costos políticos de la represión.

La ambigüedad y las contradicciones en las formas estatales de intervención sobre los conflictos sociales, son propias de la lógica capitalista que apuesta a la dispersión y no a la superación de sus problemas estructurales. Pero en el caso de la toma del Indoamericano, esta lógica rozó uno de sus puntos más extremos.

Las disidencias políticas entre la gestión de Macri y el gobierno nacional, se expresaron en espasmódicos, irresponsables y violentos modos de accionar de las policías Metropolitana y Federal que por la vía represiva no sólo pretendieron desactivar la toma, sino además se disputaron la capitalización política de su resolución.

Sin embargo, el efecto alud en tierras capitales impidió la resolución del conflicto por las vía represiva y al calor de las pujas políticas pre-electorales el

Parque Indoamericano se convirtió en un conflicto que lejos de la dispersión amenazaba con el estallido.

II-Tendencias, mecanismos y prácticas a trasluz del parque

En un nivel de análisis primario, toda toma de tierra aparece como manifestación de las luchas por el espacio urbano. Luchas que tienen su origen en la tendencia estructural de las sociedades capitalistas a desposeer de sus medios de subsistencias básicos -entre ellos la vivienda- a las grandes mayorías trabajadoras. Según Harvey, en los últimos 30 años se dio una actualización e intensificación del proceso de acumulación originaria que podría entenderse como una acumulación por desposesión (Harvey, 2004) en la medida que los derechos conquistados por las clases trabajadoras durante el Estado de Bienestar fueron sustraídos y mercantilizados por el modelo neoliberal.

En este caso, se plantea el problema en términos de crisis habitacional y se interpela al Estado por no brindar las soluciones necesarias para superarla. “La crisis habitacional que atraviesa a la sociedad argentina no es novedad: 2.170.000 hogares viven en asentamientos con viviendas de gran precariedad, con altos niveles de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos de agua potable y cloacas. El déficit habitacional es - según información oficial previa al Censo 2010 - de más de 2 millones de viviendas en diferentes condiciones de precariedad (hacinamiento, baja calidad de materiales y/o construcción, etc.) incluyendo 660 mil viviendas que deberían construirse a nuevo (CECSO, 2010)”.

Crisis que persiste a pesar del giro re-centralizador que ha convertido a la política de la vivienda en uno de los ejes centrales de la obra pública del estado nacional bajo las gestiones kirchneristas (Duarte, 2009). El Plan Federal de Construcción de Viviendas ha sido la piedra angular de este giro en las políticas urbanas cuya ejecución ha sido realizada a través de diversos

programas⁶ y ha estado sujeta -en cada caso- a las relaciones particulares entre el gobierno nacional y las gestiones provinciales y municipales.

En este contexto, ciertas políticas urbanas pueden ser interpretadas como “(...) un conjunto de mecanismos de dispersión variables y de variable articulación según una serie compleja de factores estructurales y coyunturales. En esto consiste la *dialéctica negativa* del Estado capitalista en el dominio urbano (De Sousa Santos, 1982).” Esta dialéctica define como función general del Estado dispersar y no superar las luchas y contradicciones sociales, manteniéndolas en estado de relativa latencia a través de acciones y mecanismos que hacen emerger los problemas en la formación social evitando que se enquisten en la estructura profunda (González Ordovás, 1998).

Si hemos reconocido a las tomas de tierras urbanas como procesos complejos en los que se manifiesta la lucha por el espacio urbano, tal vez podamos comprender los mecanismos y acciones del Estado en el marco de esta dialéctica negativa por la que el problema habitacional emerge para ser dispersado y no para ser superado, dado que su superación podría amenazar las bases mismas del régimen de propiedad privada capitalista⁷. Por eso ciertas políticas urbanas -junto a otras políticas estatales- implican la intervención del Estado en tanto agente redistributivo de la economía de mercado que intenta regular sus contradicciones y superar las crisis del sistema a fin de preservarlo (Harvey, 1977).

Las tomas de tierras urbanas explicitan la injusticia territorial de las ciudades capitalistas, cuestionando la concentración inmobiliaria a costa de la

⁶ El Plan Federal de Construcción de Viviendas ha sido ejecutado a través de diversos programas, entre ellos: el de “Reactivación de Obras del FONAVI”, el de “Solidaridad Habitacional” y el “Programa Federal de Emergencia Habitacional Techo y Trabajo”.

⁷ Para un análisis de este aspecto ver Giaretto, M., 2010, “Las tomas de tierras urbanas y las posibilidades de una crisis del régimen de propiedad”, en Rodríguez, M. A. y Gutiérrez, N.S.N (coord.y comps.) *Expresiones de la apropiación espacial en las ciudades latinoamericanas*. México: ALAS y Fundación Ideas Ediciones.

desposesión generalizada y convirtiendo al espacio urbano en arena misma de la lucha de clases. El Estado entonces aparece en su función redistributiva y ordenadora poniendo en juego mecanismos de dispersión del conflicto cuyas formas generales pueden ser: mecanismos de *represión-exclusión*, mecanismos de *trivialización-neutralización* y/o mecanismos de *socialización e integración* del conflicto (De Sousa Santos, 1982). Por lo general, estos mecanismos se combinan generando contradicciones que obstaculizan la articulación de estrategias de resistencia eficaces por parte de los sectores subalternos. El viraje de un mecanismo represivo a uno de integración del conflicto y viceversa es frecuente en las intervenciones estatales en las tomas de tierras, justamente la desactivación del conflicto depende en gran parte de los efectos que generen estos virajes.

En el caso del Indoamericano, el mecanismo inicial de dispersión del conflicto por parte del Estado en su conjunto - tanto local como nacional- fue el basado en la represión-exclusión. No vamos a discutir aquí las diferencias y distancias entre la policía Metropolitana y la Federal, o entre el discurso xenófobo del macrismo y la retórica anti-represiva del kirchnerismo, porque aún atendiendo a estas diferencias y distancias, lo cierto es que la toma del Parque Indoamericano fue reprimida -con un saldo de tres muertos y varios heridos-, primero por ambas policías y segundo por el accionar de patotas ligadas a punteros políticos.

Vale recuperar algunos de las crónicas periodísticas para confirmar el carácter represivo de las intervenciones estatales. “El desalojo de un grupo numeroso de familias que habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, terminó con gravísimos incidentes cuando las policías Federal y Metropolitana reprimieron a vecinos que se resistieron en la zona de la ciudad donde se encuentra la Villa 20. (...) La Guardia de Infantería reprimió con violencia a los vecinos y de acuerdo con la información obtenida por Página/12, hubo dos personas fallecidas, mientras que hay otras dos heridas de suma gravedad, entre ellas una beba. Cerca de la medianoche, fuentes de la Policía Federal consultadas por este diario confirmaron la muerte de un joven de 22 años y de una mujer de 28 años. La

información fue difundida, al principio, por el Frente Darío Santillán, que denunció en un comunicado que “los policías dispararon balas de plomo con sus armas reglamentarias y con Itakas”. La denuncia tardó varias horas en ser confirmada por una fuente oficial. Hubo más de 50 detenidos.” (Rodríguez en Página/12, 2010)

Asimismo otro medio confirmaba que: “De lo que no hay dudas es que durante el comienzo del conflicto, hace ya una semana, desde el ejecutivo nacional se ordenó la participación de la Policía Federal en el operativo para desalojar a los primeros ocupantes del parque Iberoamericano en Villa Lugano. A pedido de la justicia entonces, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, envió 200 efectivos del cuerpo de Infantería para colaborar con los 60 miembros de la Policía Metropolitana. El resultado de ésto, a esta altura reconocido hasta por los propios operadores mediáticos del oficialismo, fue el asesinato a balazos de dos vecinos de la zona. Más allá de las operaciones periodísticas de ambos gobiernos para retrasar la responsabilidad de los crímenes, las imágenes tomadas por diferentes medios mostraron la saña con la que la policía cargó contra los ocupantes del predio, a quienes persiguieron hasta dentro de la Villa 20, donde cayeron baleados el albañil Bernardo Salgueiro, de 22 años, y la ama de casa Rosemary Churapuña, de 28 años.” (ANRED, 14 de diciembre 2010)

Pero aún así, la imposibilidad de dispersar el conflicto por la vía represiva sin poder deslindarse de los costos políticos, definió la necesidad de una acción conjunta por parte de ambos gobiernos y el viraje hacia el mecanismo basado en la neutralización primero y luego en la integración selectiva de los protagonistas del conflicto. Lo que se materializó en la provisión de elementos básicos de subsistencia a las personas que se encontraban en la toma, el cercamiento del predio por la gendarmería, el censo de las personas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y el despliegue de operaciones que permitieran la negociación para la desocupación del predio.

“Después de una nueva reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires se anunció un plan de viviendas financiado en partes iguales por ambas jurisdicciones para poner en marcha la resolución del conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano. ‘Todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte del plan de vivienda ni acceder a ningún plan social’, explicó en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un punto consensuado para frenar la ocupación de tierras. Luego de que se comunicara la noticia, la mayoría de los ocupantes del predio comenzó a abandonar el lugar.”(Bruschtein en Página/12, 2010)

Así, el saldo de este proceso es un mecanismo que garantiza la obturación por la vía extorsiva de esa toma en particular y de las tomas en general⁸, un mecanismo compuesto que combina *represión-neutralización e integración* con un efecto doble: desarticular la toma del Indoamericano e impedir el efecto multiplicador que tienen las tomas y sus resoluciones en los sectores subalternos. Es un mecanismo basado en la integración por la vía de la represión, cuya eficacia depende -en gran medida y en clave gramsciana- del refuerzo hegemónico de la relación entre dirigentes y dirigidos. A ese refuerzo apuntaron las declaraciones anti-represivas después de la represión por parte de funcionarios nacionales y la retracción macrista luego de la ofensiva xenófoba⁹.

⁸ Un antecedente de este tipo de mecanismo puede encontrarse en la ciudad de Gral. Roca., cuando la gestión de Soria implementa una ordenanza que “(...) prohíbe acceder al Registro de Lotes Sociales⁸, en tanto ‘situaciones de ocupación ilegítima de tierras que sean de dominio privado o público, conforma un avasallamiento al derecho de propiedad, y conlleva situaciones violentas y de limitación de derechos hacia otros *vecinos* de la ciudad”; y la condena moral reaparece: “...actitudes como las mencionadas implican conductas antisociales que no deben ser convalidadas ya que desmerecen y colocan en situación inequitativa a aquellos vecinos que con actitud responsable se adecuan a las normas y procedimientos vigentes’ (Matus y Mazzoni, 2010).

⁹ En los primeros momentos de la toma, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri señaló como la principal causa del conflicto habitacional a “todo este avance de la inmigración ilegal”, lo que desató múltiples reacciones anti-xenófobas e incluso la necesidad de pedido de disculpas públicas de Macri por parte de la embajadora boliviana en la Argentina (Página/12, 9 y 10 de 2011). Por su parte, el ministro del interior Aníbal Fernández luego de

De este modo, la intervención estatal en la problemática urbana no se presenta ni lineal ni unívoca, puede combinar de manera aparentemente absurda mecanismos heterogéneos y/o contradictorios -tales como los de represión-exclusión e integración-socialización-. Así, se va generando una gran variedad e inestabilidad en las soluciones jurídico-políticas que promueven la representación de una política urbana estructuralmente discrepante y ambigua, y de esta manera posibilitan mayor margen de maniobra en la aplicación de los mecanismos de dispersión y dominación (De Sousa Santos, 1982).¹⁰

En relación a esta ambigüedad estatal, las prácticas de los sectores subalternos se definen y redefinen en un marco de incertidumbre que obstaculiza la organicidad de estrategias y acciones. Sin embargo, basta recorrer diferentes experiencias de tomas de tierras para identificar procesos de acumulación de aprendizajes estratégicos populares que también complejizan los modos de intervención estatal. La selección de tierras cuya toma genere un impacto político y social importante, la organización colectiva cohesionada y representada por un referente o delegado grupal que viabilice la negociación, la acción masiva y su mediatización, son solo algunos de estos aprendizajes.

En el caso de la toma del parque, estos aprendizajes y prácticas se vieron con claridad. Las tierras tomadas, por su ubicación, destino y extensión, son tierras que generan un alto impacto político y social. La organización colectiva de carácter primario que permita la cohesión necesaria para la resistencia, también fue clara, a tal punto que soportaron la represión durante días y lograron posicionarse espacial y políticamente ante el viraje de las estrategias

autorizar la acción represiva de la Policía Federal, criticó las declaraciones de Macri, sostuvo que la única solución del conflicto podía ser política y advirtió que el personal de la Policía Federal que hubiese asumido cualquier tipo de acción represiva sería expulsado de la fuerza. Todas ellas fueron declaraciones posteriores a las medidas represivas que dejaron un saldo de tres muertos y varios heridos (Ídem).

¹⁰ El análisis de diferentes casos y de la aplicación de estos mecanismos de dispersión pueden encontrarse en Giarretto, M. 2010; op.cit.

estatales. A su vez la masividad de la acción y su visibilización mediática fueron condiciones de posibilidad de la resistencia y la posterior negociación.

III- Después del Indoamericano, algunas consideraciones problemáticas

Acerca de la tendencia de acumulación por desposesión

En la actual reconfiguración capitalista, aún no están del todo claras las continuidades y rupturas entre neoliberalismo y lo que vino después – posneoliberalismo, neodesarrollismo?-, sin embargo la complejidad de las estrategias estatales no debe impedirnos revisar sus límites y alcances en relación a los conflictos sociales.

En el caso de las tomas de tierras, algunas posiciones sostienen que la crisis habitacional está estrechamente vinculada a las condiciones de precariedad laboral y desempleo de las clases trabajadoras. Pero lo cierto es que basta con realizar algunas estimaciones entre salarios y precios del suelo y de viviendas urbanas, para concluir que el acceso a la ciudad vía mercado formal no está dentro del horizonte de expectativas posibles de estas clases. De hecho, no podemos negar que los indicadores macroeconómicos en la Argentina de los últimos años marcan crecimiento económico y ciertas mejoras en el mercado de trabajo, pero aún así el déficit habitacional es un problema estructural que las actuales políticas sociales no logran -si es que realmente lo intentan- solucionar.¹¹

¹¹ En este sentido, compartimos la idea de que “(...) podemos comprender por qué el crecimiento económico que hubo en Argentina a partir de 2002 no mejoró sustancialmente el problema de la vivienda, y en muchos sentidos tal vez lo empeoró. En sus rasgos esenciales, ha sido característico del período el acrecentamiento de las diferencias de inversión y construcción entre barrios acomodados, para las clases medias altas y la burguesía, y las construcciones en los barrios populares y obreros. Esto se produjo al margen de que hubiera un gobierno de tinte un poco más progresista o reaccionario en la ciudad de Buenos Aires, ya que en sus directrices fundamentales respondió a la lógica de la valorización. Y también estuvo vinculado a rasgos del “modelo productivista K”, en particular a la debilidad de la inversión ampliadora del capital.” (Astarita, 2010).

Sin embargo, reconocer esta tendencia estructural a la acumulación por desposesión no implica invisibilizar la complejidad de los procesos y luchas sociales actuales, por los que las clases trabajadoras interpelan al Estado a través de diferentes acciones políticas, entre ellas las tomas de tierras. En ese marco, el Estado despliega diferentes estrategias de acuerdo a las coyunturas y los niveles de conflictividad. De allí la necesidad de analizar las políticas sociales desde una perspectiva crítica, que identifique sus límites y alcances.

En este sentido, puede pensarse que “La política social es, pues, una mediación del antagonismo entre capital y trabajo, que evidencia la imposibilidad del capital de liberarse de las reivindicaciones de la clase trabajadora (y mucho menos de su existencia), aún en momentos en los cuales la capacidad de iniciativa de ésta se encuentra en franco retroceso (...) (Ciolli, 2009).” Lo que es evidente en el caso de la vivienda, en tanto medio de subsistencia y de reproducción de la clase trabajadora.

Por eso, “Analizar la acción del Estado en torno a las políticas sociales permite comprender que, a pesar de su apariencia, éstas constituyen formas diferenciadas de re-construir la subordinación de la clase trabajadora en la relación social del capital, dado que contribuyen a sostener la disponibilidad de la mercancía fuerza de trabajo en el mercado.(...) La política social, alimenta la particularización en el Estado de la dominación de una clase sobre otra, a través de su conformación como autoridad pública impersonal. Lo cual implica su participación en la lucha de clases (Ídem).”

En las tomas de tierras urbanas esa participación del Estado en la lucha de clases, es evidente y dicha autoridad pública impersonal, se expresa en tanto resguarda y garantiza el derecho a la propiedad privada capitalista. Por lo tanto, deviene en arena misma de la lucha de clases. En este sentido, la política social se convierte en una mediación cargada de contradicciones y conflictos.

Acerca de ciertos mecanismos estatales de dispersión del conflicto y algunas prácticas políticas de los sectores subalternos

En este punto del análisis cabe preguntarnos cuán acertado resulta el abordaje de las intervenciones estatales en tomas de tierras desde las nociones de *dialéctica negativa del Estado capitalista* y de *mecanismos de dispersión de los conflictos sociales*.¹²

A simple vista podemos reconocer que tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Entre las primeras, creemos que la fundamental es que reubica el foco de análisis en el Estado, mientras que ciertas perspectivas lo desplazan (Hardt y Negri 2000, Holloway 2002), pero además lo hace con un nivel de criticidad que reinstala la naturaleza capitalista del Estado más allá de sus diferentes estrategias y modos de acumulación. Sin embargo, entre las desventajas advertimos la posibilidad de anclar el análisis del Estado capitalista en su fase de negatividad, y encima hacerlo en términos de mecanismos. De allí la necesidad de reconocer los aportes específicos de cada experiencia, así como las prácticas y aprendizajes políticos de los sectores subalternos que interpelan, definen y redefinen los modos de intervención estatal. Lo que nos permite pensar al Estado como condensación material de determinadas correlaciones de fuerzas intra-clases y entre clases sociales antagónicas, cuya cristalización institucional no puede estar libre de contradicciones y conflictos (Poulantzas, 1991).

Por eso la versión compuesta que nos lega el Indoamericano de un mecanismo basado en la represión-neutralización-integración, es un legado que los sectores subalternos y aquellos que acompañen y protagonicen luchas contra

¹² Es clara la impronta de Adorno y del primer Poulantzas en estos conceptos de De Sousa Santos. Y es justamente la revisión del propio Poulantzas de los conceptos de Estado, de poder y de clases, así como la noción de Estado ampliado de Gramsci, lo que nos permite comprender al Estado como arena y resultado de las luchas de clases. Superado el debate marxista entre instrumentalismo y estructuralismo, de lo que se trata es de comprender la realidad social en tanto totalidad concreta. construida y transformada en el proceso mismo de las luchas sociales, realidad y proceso en los que el Estado adquiere una centralidad indiscutible.

la desigualdad del sistema deberán asumir y desandar¹³. La obturación por la vía extorsiva -quien participe de una toma no podrá acceder a planes sociales- de las tomas de tierras como acción política disruptiva del orden territorial, implica una dura cerrazón para la lucha social. Es una medida punitiva con graves consecuencias para quienes no tienen acceso a la vivienda. Imaginemos que los trabajadores asalariados fueran vedados del derecho a huelga aludiendo que no podrán acceder a trabajo alguno, o que el corte de una ruta o calle significara luego no poder circular por ellas.

A simple vista, esta concesión de la lucha reivindicativa puede implicar graves consecuencias sobre la lucha política, en la medida que la toma como forma de inscripción política del conflicto implicará de ahora en más la obturación de posibles soluciones estatales. Esto quiere decir que la reivindicación de vivienda y de acceso a la ciudad por parte de los sectores subalternos a través de tomas de tierras, de ahora en más implicará una disrupción aún mayor, en la medida que aquellos que participen o hayan participado de una toma de tierras no podrán acceder a planes sociales. Pero esto también se convierte en un problema para el Estado que quedará entrampado en su propia imposibilidad de acción, si realmente cumple con sus imposiciones.

De este modo, la toma de tierras deviene en un conflicto político aún más complejo: mientras mayores sean las limitaciones impuestas por el orden imperante, mayores son los obstáculos para organizar y sostener una medida disruptiva, pero también mayor es su impacto y las potencialidades para la transformación de dicho orden.

¹³ Cabe señalar que a seis meses de la toma del Parque Indoamericano, se mantiene abierto el proceso de judicialización y criminalización por el que dos militantes sociales Diosnel Pérez, referente del Frente Popular Darío Santillán de la Villa 20, y a Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa de Villa Soldati, han sido acusados y procesados por 'instigar' la toma del parque. Fuente: entrevista a Federico Orchani, vocero de prensa del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), en Radio Futura / Rap-Colectivo de Colectivos, Martes 7 de junio de 2011.

Estas consideraciones resultan problemáticas porque revelan que cada experiencia concreta complejiza el proceso y las tendencias generales, y que al mismo tiempo debemos ir más allá de su especificidad, en este caso, más allá del Indoamericano, pues, la realidad concreta y sus propias contradicciones¹⁴ confirman la necesidad de continuar y profundizar esta línea de investigación.

Referencias

- **Astarita**, Rolando, 2010, *La cuestión de la vivienda y el marxismo*. En <http://rolandoastarita.wordpress.com/2010/12/30/la-cuestion-de-la-vivienda-y-el-marxismo/>
- **Ciulli**, Vanesa 2009 “Estado y luchas de clase: una aproximación desde la política social en la Argentina neoliberal.” Revista *Herramienta* N° 42, Bs. As.
- De Sousa Santos**, Boaventura, 1982, “O Estado, o Direito e a Questao Urbana” En *Revista Crítica de Ciências Sociais*, Nro. 9, pág.40.
- Duarte**, Juan Ignacio, 2009, “Políticas públicas de hábitat y suelo urbano.” Ponencia presentada en Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) Bs. As., 31 de agosto al 4 de septiembre
- González Ordováz**, María José, 1998, “La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas.” En Revista de *Estudios Políticos* (Nueva Época) Nro. 101. Julio-Septiembre 1998, pp. 303-328.
- Harvey**, David, 1977, *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid, Ed. Siglo XXI.
- Harvey**, David, 2004, “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”, en *Socialists register* CLACSO/ By Leo Panitch and Colin Leys. London, Merlin Press.

¹⁴ El 28 de julio de 2011, otra toma de tierras en la Argentina implicó la intervención represiva del Estado. En el pueblo de Libertador Gral. San Martín, pcia. de Jujuy, entre 500 y 700 familias tomaron 15 hectáreas del Ingenio azucarero Ledesma. “En Libertador son 3000 familias (una de cada tres familias de la localidad) tiene problemas habitacionales. Por otro lado, el Ingenio cuenta con 157.556 ha, de las cuales están en producción sólo 38.000 con caña de azúcar. Según cálculos estimativos, 40 ha alcanzarían para resolver el problema de vivienda en Libertador General San Martín.” Previa orden de desalojo y en medio de negociaciones entre la CCC y la gestión local, la policía provincial reprimió a las familias y desalojó el predio: cuatro personas resultaron muertas, varias heridas y decenas detenidas. Fuente: Anred, 28 de julio, 2011.

-**Matus, Ana y Mazzoni, María**, 2010, “Conflictividad social vinculada a la apropiación del territorio para habitar”, ponencia presentada en las Jornadas Pre-Alas Autogestión, Democracia Participativa, Estado Político, realizadas del 1 al 3 de diciembre en Neuquén -Fisque Menuco, Universidad Nacional del Comahue.

-**Poulantzas, Nikos**, 1991, *Estado, poder y socialismo*. México, Siglo XXI.

Fuentes

-**ANRED**, 2010, “El desalojo, la muerte y la Xenofobia. Reacomodamientos e interrogantes.” 14 de diciembre 2010, consultado el 5 de enero 2011.

-**Telam**, 2010, “El Gobierno nacional entregará a Macri el mapa social del Parque Indoamericano.” Fuente Telam, <http://www.telam.com.ar/vernota> consultado el 2 de febrero de 2011.

-**Bruchstein, Julián**, 2010 “Cómo convertir a los ocupas en desocupas.” En *Página/12*, 15 de dieicmbre.

-**CECSO**, Equipos de Economía Política y de Hábitat Popular del Centro de Estudios para el Cambio Social 2010, “Crisis habitacional. Dialécticas del modelo neodesarrollista.”, consultado en <http://cecsodeargentina.wordpress.com/> 5 de enero 2011.

-**Rodríguez, Carlos**, 2010 “Día de fuego y sangre en el sur de la ciudad.” En *Página/12*, 8 de diciembre.

- Entrevista a Federico Orchani, vocero de prensa del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), en Radio Futura / Rap-Colectivo de Colectivos, Martes 7 de junio de 2011.

-Página oficial del Gobierno de la Ciudad http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/dis_participativo/indoamericano. Consultado el 2 de febrero del 2011.